

Boletín Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.—Se suscribe en la imprenta de D. Cosáreo Paz y Hermano, Fuente del Rey número 6 á 20 rs. trimestre para esta capital, y 30 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.—Números sueltos á 12 cuartos el pliego.

PARTE OFICIAL.

PRIMERA SECCION.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

S. M. la REINA nuestra Señora (Q. D. G.) y su augusta Real Familia continúan en esta Corte sin novedad en su importante salud.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

De acuerdo con el parecer del Consejo de Ministros,

Vengo en autorizar al de Hacienda para que someta á la deliberación de las Cortes un proyecto de ley en que se determinan las pensiones que al cesar en sus cargos deben disfrutar los empleados públicos, y las de viudedad y orfandad de sus familias.

Dado en Aranjuez á 18 de mayo de 1862.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverría.

A LAS CORTES.

El Estado no puede declinar la obligación de remunerar los servicios que le prestan los hombres que se consagran á la defensa de la patria y al ejercicio de las funciones que tienen por objeto el gobierno, la justicia y la pública administración. Su propio interés se la impone, porque sin la esperanza de una recompensa cuando por la edad ó las fatigas del servicio son alejados de él, y sin el consuelo de legar después de su muerte á sus familias algún elemento de subsistencia, habría pocos funcionarios que sostuvieran el decoro de sus cargos y la integridad de sus deberes, arrojando sin temor todas las consecuencias de un porvenir de privaciones, para entregarse tranquilos á la gestión de los negocios, con la pureza, el celo y la rectitud de intención que constituyen las primeras virtudes del hombre público.

En nuestro país, por fortuna, no se ha desconocido la fuerza y la justicia de estas consideraciones, y de antiguo vienen atendidos los funcionarios bajo el punto de vista de sus derechos pasivos.

El cuadro actual de estos derechos, que es el reflejo de nuestra historia del presente siglo, y resume las varias vicisitudes de nuestra regeneración social y política, ofrece cierta importancia; pero es conveniente presentarlo á la vista del país en todos sus detalles, para desvanecer falsas y equivocadas apreciaciones.

El número de titulares de clases pasivas se eleva hoy á 48,819, y deduciendo 6,350 regulares excastrados, cuyos derechos nacen de una ley especial, y 97 pensiones sobre los secuestros de los ex-Infantes, quedan por servicios al Estado 42,392.

De este número, 31,890 pertenecen á las diversas clases militares en esta forma:

19,918 retirados de Guerra y Marina.
8,101 pensiones sobre los montepíos militares.
260 pensiones de las legiones y cuerpos extranjeros disueltos.
909 pensiones y suministros á convenidos de Vergara.

29,188 suma, á la que deben unirse 2,702 pensiones remuneratorias que casi en totalidad proceden de servicios militares.

31,890

Los de todas las clases civiles son 10,502 á saber:

2,653 cesantes de los diversos ramos, incluidos los emigrados de América.
4,680 jubilados de todos los Ministerios.
6,169 pensiones de los montepíos civiles.

10,502

Los haberes de clases pasivas suman en totalidad 147,596,880 rs.; y deduciendo 11,991,000 de pensiones de regulares, 200,000 por mesadas de supervivencia, y 400,000 de pensiones sobre secuestros de los ex-Infantes, queda un total de rentas vitalicias por servicios al Estado de 135,002,880 rs.; correspondiendo 78,793,325 á las clases militares, y 56,209,555 á las civiles, en esta forma:

51,630,000 retirados de Guerra y Marina.
22,500,000 pensiones de los montepíos militares.
400,000 pensiones de legiones y cuerpos extranjeros disueltos.

335,279 pensiones y suministros á convenidos de Vergara.
3,930,046 pensiones remuneratorias.

78,793,325 total por servicios militares.

16,479,060 cesantes de los diversos ramos, incluidos los emigrados de América.

19,646,193 jubilados de todos los Ministerios, y

20,084,362 pensiones de los montepíos civiles.

56,209,555 total por servicios civiles.

Clasificando el número de los titulares por la importancia de sus dotaciones anuales, resulta:

24,829 de 1 real hasta 2,000 rs.
7,691 de 2,001 á 4,000
3,314 de 4,001 á 6,000
2,526 de 6,001 á 8,000
1,447 de 8,001 á 10,000
897 de 10,001 á 12,000
577 de 12,001 á 14,000
427 de 14,001 á 16,000
247 de 16,001 á 18,000
225 de 18,001 á 20,000
367 de 20,001 á 25,000
81 de 25,001 á 30,000
45 de 30,001 á 35,000
89 de 35,001 á 40,000

Agrupando mas las dotaciones anuales, aparece:

52,520 de menos de 4,000
7,117 de 4,001 á 10,000
2,173 de 10,001 á 20,000
1,448 de 20,001 á 30,000
154 de 30,001 á 40,000

El término medio común da tan solo por cada titular 3,184,63.

Examinados así estos datos, se evidencia que es corto el número de las dotaciones de cierta importancia, siendo la generalidad de los haberes puramente alimenticios; y si se tiene en cuenta que en la mayoría de los casos cada titular es jefe de una familia sostenida con privaciones, es lógico deducir que las pensiones son mas bien un socorro, y que si no existiesen, tendría que prestarlo la beneficencia del Estado.

Debe observarse tambien.

Que los retiros y jubilaciones, de corta duración en los grados máximos de las escalas por las condiciones de edad y de servicios que suponen, suman 71,276,193 reales, distribuidos entre 21,598 titulares, 52 y 50 por 100 respectivamente de los totales generales ya demostrados; que los montepíos cuyas pensiones tienen origen oneroso porque proceden de los

descuentos hechos á las clases militares hasta 1857 y á las civiles hasta 1828 en que se clasificaron los empleos incorporados y se rebajaron los sueldos, están representados por 14,270 titulares (35 por 100) con reales vellón 42,584,362 (31 por 100); y que los cesantes de todos los ramos á quienes la opinión pública que ha considerado equivocada y comúnmente como causa principal del gravamen que causan al Estado las clases pasivas, como si ellos constituyesen la única para el presupuesto, son tan solo aun incluyendo los emigrados de América, 2,655 titulares (6 por 100) que perciben 16,479,060 rs. (12 por 100).

La importancia de sus dotaciones anuales se descompone así:

942 titulares con menos de 2,000 rs.
681 con 2,001 á 4,000
359 con 4,001 á 6,000
259 con 6,001 á 8,000
145 con 8,001 á 10,000
50 con 10,001 á 12,000
23 con 12,001 á 14,000
61 con 14,001 á 16,000
28 con 16,001 á 18,000
42 con 18,001 á 20,000
25 con 20,001 á 25,000
57 con 25,001 á 30,000, y
23 con 30,001 á 40,000

Entre los titulares de mas altas dotaciones están los que han sido Ministros de la Corona, los que han ejercido cargos diplomáticos y de la magistratura, los altos funcionarios de las diversas carreras y los gobernadores de provincia, á quienes los cambios políticos afectan y han de afectar siempre forzosamente; y entre los de dotaciones mas exiguas figuran á la vez muchos empleados de los antiguos resguardos, y otros, en no escaso número, que por su edad y circunstancias no se encuentran en disponibilidad de servicio, y á los que la diferencia actual de derechos impide pasar como debieran á la clase de jubilados.

La legislación vigente sobre derechos pasivos, compuesta de disposiciones parciales, incoherentes y contradictorias, como expedidas en tiempos diversos y bajo la influencia de distintas ideas, carece de unidad, no se funda en principios de estricta igualdad para todos los servidores del Estado, ni exige de ellos las mismas condiciones para optar al beneficio de los derechos que establecieron. Algunos empleados tienen el estímulo y la recompensa de una pensión por término de su carrera ó después de su muerte para si y para sus familias; otros carecen de esas ventajas; entre los primeros, le mismo consiguen para sus hijos los que consagraron toda su vida al Estado.

que los que solo se sirven pocos días...
...en una palabra, no existe una regla común que conceda a todos los funcionarios de las diversas carreras los mismos derechos en igualdad de circunstancias, haciéndoles derivar estrictamente de la proporción del sueldo que disfrutaron y del tiempo que sirvieron, salvo los casos de merced o distinción.
Según el fin de exponer el origen de los derechos pasivos declarados a las clases militares y a las civiles, los tipos reguladores de los cursos del retiro, de la cesantía, de la jubilación y de los montepíos, la forma en que primitivamente fueron constituidos estos establecimientos, las ampliaciones que después se les dieron, y las muchas variaciones que todo ello ha experimentado con el curso del tiempo y los cambios de la administración.

La complicación producida por disposiciones tan incoherentes, sugirió al Gobierno la idea de emprender una reforma fundamental que lo ordenase todo según los principios de la igualdad y de la justicia, y que reconciliara la recompensa debida a los servidores de la nación con los intereses del Tránsito.

Para llevar a cabo esta reforma, constituyó una comisión de trabajos de una comisión creada al efecto por Real decreto de 21 de octubre de 1849, compuesta de personas competentes, y tanto por la historia ilustración de sus individuos, cuanto por haberse representados en ella las diversas carreras del Estado; y contaba además con un luminoso trabajo posterior de la junta de clases pasivas.

El transcurso del tiempo ha hecho inalterable hoy una de las bases establecidas por la comisión de 1849, la contribución sobre los sueldos por razón de montepío extensiva a los empleados de Ultramar y a los de todas las carreras en la Península.

La depreciación progresiva del numerario ha elevado proporcionalmente el costo de los inquilinos, de los objetos de primera necesidad, y de cuanto es indispensable a la vida diaria modesta; y si por tal causa quedaron suprimidos en 1857 los descuentos de todas clases sobre los sueldos, lejos de admitir éstos en el día retroceder en alguna, será difícil mantenerlos mucho tiempo en su actual importancia.

En lo demás, el Gobierno al redactar el proyecto que hoy somete a la deliberación de las Cortes, ha aceptado por punto general las bases que fijó la comisión de 1849.

El respecto a los derechos adquiridos, principio sagrado a que no puede faltar sin menoscabo del crédito del Estado, es uno de los fundamentos de la nueva ley, que tiene por principal objeto igualar los derechos pasivos de todos los funcionarios de las diferentes carreras en la Península y en Ultramar, dadas las mismas condiciones de tiempo, servicios, sueldo y edad, excepto en los casos especiales de distinción y honores que se conceden a ciertos individuos, restringiendo sus límites, y ampliando y generalizando aquellas condiciones para haber de optar a todos ellos.

Las ventajas de los montepíos, adquiridos hasta ahora sin condición alguna de tiempo, no se obtendrán adelante, ni el derecho de años de servicios, y si bien se ha creado necesidad, resuelto en general la opción a los demás derechos pasivos, se introducen en las carreras los montepíos más aproximados que corren la falta de equidad que resultaba de conceder la misma pensión a un empleado que sirviera, por ejemplo, 55 años, y a otro que a aquel cuyo tiempo de servicio no pasara de 25 años.

Los efectos de la reforma no podrán ser inmediatos, pero al menos en todas sus partes, porque las de esta clase se proyectan

si influirán solo con el transcurso del tiempo; pero puede asegurarse que, los beneficios que reportará el Tesoro de la restricción puesta a los gozadores de los montepíos, compensarán sobradamente el gravamen que le ocasiona la justa igualación de derechos a los empleados de todas las carreras.

Este gravamen no puede ser considerable, en cuenta que apenas llegan a 2.700 los empleos y cargos en la Presidencia del Consejo de Ministros y en los Ministerios de Estado, Gracia y Justicia, Gobernación y Fomento, cuyos titulares carecen, unos del derecho a montepío y otros del de jubilación y cesantía; que sus dotaciones corresponden a un término medio de 8.000 rs., y que muchos de los que los sirven tienen adquiridos esos derechos por proceder de otras carreras.

Consignados a una planilla solemne todos los derechos de los servidores del Estado; asegurado por medio de una ley su porvenir y el de sus familias; destruidas las diferencias que hacían privilegiadas unas carreras sobre otras, sin que la razón ni el bien del servicio la justificasen, participarán indistintamente de la munificencia nacional los que hayan de ejercer la justicia, manejar la Hacienda, conservar el orden, defender la patria, regir en fin los intereses más preciosos del país.

Las Cortes, reconociendo así, deliberarán en su sabiduría lo que creyesen más justo y más conveniente, en vista del proyecto de ley que tengo la honra de someterles de orden de S. M., y con acuerdo del Consejo de Ministros.

Madrid 20 de mayo de 1862.—Pedro Salaverria.

PROYECTO DE LEY.

CAPÍTULO I.

Disposiciones generales.

Art. 1.º Las empleados de todos los ramos de la Administración, así civiles como militares, incluidos los de las provincias de Ultramar, al cesar en sus cargos, y sus viudas y huérfanos cuando aquellos fallecieron tienen derecho a pensiones sobre el Tesoro público según los casos y condiciones que se determinan en esta ley.

Art. 2.º Para los efectos de esta ley se consideran empleados públicos:

En las carreras civiles, los que desempeñaren o hubieren desempeñado por nombramiento Real o de los Cuerpos colegisladores, empleos de planta comprendida en los presupuestos generales del Estado, y cuyas dotaciones no bajen de 6.000 rs. anuales.

En las clases militares y de la armada los oficiales, jefes y generales.

Y en las carreras jurídica y político-militares, castrense, de sanidad militar y de la armada, los de las clases equivalentes a éstas.

Art. 3.º Los empleados y clases de tropa del ejército, armada e institutos militares no comprendidos en el artículo anterior, así como sus viudas y huérfanos podrán sin embargo optar a pensión en los casos especiales que se determinan en esta ley.

Art. 4.º El reconocimiento de las pensiones se hará por una junta dependiente del Ministerio de Hacienda, compuesta de empleados de categoría superior nombrados por la Presidencia del Consejo de Ministros, dándole haber cuando menos un vocal procedente de las carreras que dependen de cada uno de los Ministerios. La junta fundará sus resoluciones en los documentos oficiales que obtenga, o en los que presente los interesados, previa en este caso la comparencia de los documentos por las oficinas correspondientes.

Los acuerdos de la junta serán ejecutorios cuando se tomen por unanimidad. En otro caso el vocal o vocales que discrepan, motivarán su voto, y se consultará el

expediente al Ministerio de Hacienda dentro de los treinta días siguientes al del acuerdo, bajo la responsabilidad de la junta.

Los interesados que no se conformaren con los acuerdos ejecutorios de la junta, podrán alzarse en quita al Ministerio de Hacienda en el término de treinta días, contados desde el en que se les hubieren comunicado o se publiquen en la Gaceta. Les quedará además reservado el recurso por la vía contenciosa ante el Consejo de Estado contra las resoluciones del Ministerio de Hacienda, que podrán ejercitar en el término también de treinta días, después del en que se les comunicaren o inserten en la Gaceta.

Los acuerdos de la junta se publicarán periódicamente, y podrán revisarse en cualquier tiempo, en virtud de Real orden, si se presumiere falsedad en algunos de los documentos en que estuvieren fundados. Estarán sujetos al examen de la comisión de los Cuerpos colegisladores, inspectora de los actos referentes a la deuda pública.

Art. 5.º Las pensiones de los empleados se concederán por razón de tiempo de servicio o de excedencia, las de viudas y huérfanos por fallecimiento o por la pérdida de los derechos del empleado.

Art. 6.º Las pensiones de retiro son vitalicias; las de excedencia, por el tiempo que el empleado estuviere en esta situación y las de las viudas y huérfanos, serán temporales o vitalicias.

Art. 7.º La importancia de todas las pensiones, excepto las de los Ministros de la Corona y las de sus viudas y huérfanos, será la que corresponda al número de años de servicios del empleado, y se regulará por el mayor sueldo de planta que en uno o más destinos de nombramiento Real o de las Cortes, arrendados en propiedad, hubiere disfrutado por la menor de dos años. En el caso de no haber gozado el mayor sueldo durante este tiempo, se acumulará el que fuere al que con otro inferior hubiere servido el empleado, constituyendo el sueldo regulador aquel en que se totalicen los dos años.

A los individuos de las clases militares que obtengan empleo el día cuyo sueldo no deba compararse a percibir sin después del plazo que determinan los reglamentos del ejército y armada, se les contará para el sueldo regulador el de aquel empleo, como si lo hubieren disfrutado desde la fecha del nombramiento.

Para los empleados en las provincias de Ultramar, el regulador consistirá en las dos terceras partes del sueldo que hubieren disfrutado dos años, o de aquel en que lo totalicen, sin que pueda exceder de 80.000 rs.

Art. 8.º Si habiendo disfrutado en propiedad un sueldo superior, obtuviere en comisión el empleado por nombramiento Real un destino de planta comprendido en presupuestos con sueldo inferior, se considerará el tiempo que lo desempeñe como continuación del destino de mayor sueldo.

Art. 9.º No se computarán como sueldo

Los sobresueldos, gratificaciones y emolumentos inherentes a un empleo.

Las asignaciones eventuales que consistan en un tanto por ciento del producto de las rentas administradas en esta forma: La parte que exceda de 60.000 rs. en los sueldos hasta 90.000 inclusive.

La parte que exceda de 80.000 en los sueldos superiores a 90.000 rs.

El exceso en los sueldos de los jefes y oficiales del ejército de los que estén señalados a las respectivas clases en el arma de infantería.

Art. 10.º En la carrera diplomática el sueldo regulador de las pensiones será:

Ochenta mil reales para los embajadores.

Seenta mil para los ministros plenipotenciarios.

Cuarenta mil para los ministros residentes.

Trinta mil para los encargados de negocios y cónsules generales.

Los demás empleados en la carrera diplomática se sujetarán a los sueldos reguladores que les correspondan según el artículo 7.º

Art. 11.º El tiempo de servicio abonable a los empleados para sus pensiones y las de sus viudas y huérfanos, será únicamente el que hubieren servido.

En los diferentes institutos del ejército y armada.

En destinos de planta con asignación fija o eventual, con retribución, siempre que se obtuvieren por nombramiento Real de los Cuerpos colegisladores.

En plazas de planta, con asignación fija o eventual, de nombramiento de las direcciones generales o de los jefes de la administración, autorizados previamente por el Gobierno.

En cargos, comisiones o juntas con retribución o sin ella, autorizadas por el Gobierno, si al crearse declarase éste de abono el tiempo que en ellas empleen sus individuos.

En destinos retribuidos con fondos provinciales, municipales o particulares, si fueren de nombramiento Real.

En clase de agregados sin sueldo de la carrera diplomática, mientras sirvan en el extranjero.

Art. 12.º El tiempo de servicio se contará en los empleos y cargos civiles, desde el día de la posesión, y en las clases militares y político-militares, según lo que determinen las leyes orgánicas o las disposiciones especiales de cada instituto.

Es acumulable en cualquiera carrera del Estado el tiempo que se hubiere servido en las demás.

Art. 13.º Será abonable a los empleados del cuerpo diplomático y a los del ejército el aumento de uno mitad del tiempo que sirvan fuera de Europa.

Igual abono corresponde, a contar desde el día del embarque, a los empleados en las provincias de Ultramar, excepto los naturales de ellas que sirvan en la que estuviesen domiciliados.

Art. 14.º En ningún caso se tomarán en cuenta los servicios prestados en las carreras civiles antes de la edad de 16 años.

Art. 15.º Son abonables para la pensión de retiro por razón de estudios, con deducción de los anteriores a la edad de 16 años, y sin duplicación, cuando al mismo tiempo se hubieren desempeñado empleos, o prestado servicios que produzcan abono.

Seis años a los titulares de carreras que exijan el grado de licenciado o doctor en una facultad, si el retiro lo obtienen dentro de las mismas carreras, y cuatro en el caso de que se les conceda en otra que no exija aquella investidura, si en la primera sirvieron diez años.

Cuatro años a los oficiales de los cuerpos facultativos del ejército y armada, a los ingenieros de caminos, minas, montes, y demás clases análogas, si en su carrera obtuvieron el retiro, y tres caso de obtenerlo en otra, habiendo servido diez en aquella.

Art. 16.º Son también abonables para pensión de retiro:

Los años de campaña, sin que puedan exceder de seis años, a no reunir el interesado 25 de servicios.

La mitad de tiempo de excedencia, cuando ésta no imprima tacha moral al funcionario.

Art. 17.º Las pensiones de retiro no pasarán de 90 céntimos del sueldo regulador, sin que puedan exceder de 40.000 rs., y de 50.000 en Ultramar.

Las de excedencia consistirán a lo más en la mitad de los sueldos reguladores.

Las de las viudas y huérfanos en la cuarta parte a lo más de los mismos sueldos reguladores.

Art. 18.º Son necesarios seis años de servicios en las provincias de Ultramar para que los empleados en ellas o sus viudas y huérfanos puedan optar a pensiones reguladas por los sueldos de dichas provincias.

No podrán mejorarse estas pensiones

por servicios posteriores prestados fuera de las provincias de Ultramar.
Para contar los sesenta años de residencia, se computará el tiempo que el empleado haya servido en la Península o en el extranjero con licencia o por otra causa cualquiera que no sea de su voluntad.
Art. 19. El derecho a las pensiones de retiro y excedencia se pierde en los casos de terminados por el Código penal y por las ordenanzas del ejército y armada. En estos casos la mujer o hijos del empleado disfrutarán como si aquel hubiese fallecido, mientras subsista la habilitación.
Art. 20. Los empleados que fueren procesados criminalmente gozarán durante los procedimientos la pensión de excedencia a que tuvieren derecho, en cuyo percibo continuarán si obtuvieren absolución hasta que vuelvan al servicio activo. Si fueren condenados, cesarán en el cobro de pensión, mientras no se determine la situación en que deba considerarseles.
En el primer caso, tendrán derecho para optar a pensión de retiro a la mitad del tiempo que hubieren durado los procedimientos, y que permanezcan sin volver al servicio activo.
Art. 21. Los empleados que incurran en responsabilidad civil directa para con el Estado, perderán sus derechos a pensión de excedencia y retiro mientras no reintegren al Tesoro público. A su fallecimiento, los viudas y huérfanos optarán a la pensión que les corresponda.
Art. 22. El empleado sentenciado que obtuviere indulto y rehabilitación, no optará a otros derechos que a los que le correspondan desde la fecha en que fuese rehabilitado.
Art. 23. Los empleados que desde el día en que se les declare retirados o excedentes, y las viudas o huérfanos desde el del fallecimiento de sus maridos o padres, dejen trascurrir más de cinco años sin reclamar la pensión que les corresponda, solo tendrán derecho a percibir como atrasos las cinco anualidades inmediatas a la fecha de la reclamación.
Art. 24. Las viudas y huérfanos de los empleados de clases no comprendidas en el art. 2.º, fallecidos en activo servicio, tendrán opción a dos mensualidades del sueldo que éstos disfrutaban a su fallecimiento.
Art. 25. El Gobierno continuará concediendo pensiones y limosnas, conforme a las disposiciones vigentes, a las clases de tropa del ejército y armada, a los operarios de las minas de Almadén, a los de los arsenales y demás establecimientos del Estado, y a sus viudas y huérfanos.

CAPITULO II.

Pensiones de los Ministros de la Corona y de sus viudas y huérfanos.

Art. 26. Los Ministros de la Corona, al cesar en sus cargos, disfrutarán la pensión de 40,000 rs. si contasen 20 años de servicios, y la de 30,000 en otro caso. Sus viudas y huérfanos optarán desde el fallecimiento de aquellos a la mitad de dichas pensiones.

CAPITULO III.

De las pensiones de retiro.

Art. 27. El empleado tiene derecho a retirarse del servicio activo:
Por heridas recibidas del enemigo o en el desempeño de sus funciones.
Por inutilidad contraída en actos del servicio, o como consecuencia forzosa de ellos.
Por razón de edad, a su instancia, cuando haya cumplido 65 años en las carreras civiles, o cuando 20 de servicios en las militares.
Por facultad, cuando física o moralmente se halle incapacitado para el servicio de una manera absoluta, acreditándolo

en expediente formado con sujeción a lo que determinen los reglamentos, y b) d) de la Junta de Pensiones.

El Gobierno podrá expedir el retiro a los empleados civiles cuando hayan cumplido 60 años, o los considere incapacitados físicos o moralmente, previo expediente que se instruirá de oficio con audiencia del interesado.

A los empleados de las clases militares y de la armada, jurídico y político-militar, castenses y de sanidad militar y de la armada, según lo que determine la ley de ascensos y demás disposiciones orgánicas de cada institutor.

Art. 28. El empleado retirado tiene derecho a pensión si justifica 20 años de servicios, conforme a las disposiciones generales de esta ley. Si por circunstancias especiales se les concediese el retiro sin contar los 20 años de servicio, disfrutando pensión de excedencia, se le señalará de retiro la pensión que cobrase como excedente. En los demás casos solo lo que el arancel de preeminencia y fueros y consideraciones que por su clase le correspondan.

Art. 29. Las pensiones de retiro serán proporcionales al sueldo regulador del empleado desde los 20 años de servicios en adelante, con sujeción a la siguiente

ESCALA DE RETIROS.

AÑOS DE SERVICIO.	CÉNTIMOS del sueldo regulador que constituyen la pensión anual.
20	30
25	50
30	60
31	63
32	66
33	69
34	72
35	75
36	78
37	81
38	84
39	87
40	90

Art. 30. Cuando por heridas o lesiones recibidas en acción de guerra o en el desempeño de sus funciones, queden enteramente inútiles para continuar en el servicio activo, optarán los empleados a una pensión igual al mayor sueldo que hubieren disfrutado, sea cualquiera el tiempo que cuenten de servicio.
Si la inutilidad consistiese en la pérdida de un miembro o total de la vista, tendrán opción a la totalidad de mayor sueldo, y a 20 céntimos más.

Art. 31. El empleado disfrutará la pensión de retiro desde el día siguiente al en que cese en el servicio activo, y desde la fecha de la declaración de retirado si lo fuere por inutilidad o estuviere fuera del servicio activo.

Art. 32. La pensión de retiro es compatible con cualquier asignación de fondos provinciales, municipales y particulares.

Art. 33. Los retirados pueden fijar su residencia en el punto del reino que mejor les convenga, sin obligación de ocuparse en otros asuntos oficiales que aquellos en que tengan responsabilidad por actos en el servicio activo. Para residir en el extranjero necesitan obtener licencia del Gobierno. Si se ausentaren sin ella, se suspenderá el pago de la pensión hasta que la obtengan.

Art. 34. Ningún retirado puede volver al servicio activo por motivo ni bajo pretexto alguno, a excepción de los que fueren nombrados Ministros de la Corona.

Art. 35. Los individuos de las clases de tropa del ejército y armada adquirirán derecho a pensión de retiro sin sujeción a tiempo de servicio, cuando se inutilicen por resultados de heridas y de las fatigas de la guerra, o en actos del servicio.
En estos casos la pensión será de 120 reales mensuales para los sargentos, y de 90 para las demás clases de tropa, con el aumento de 20 céntimos cuando hubiere pérdida de miembro o total de la vista.

CAPITULO IV.

Pensiones de excedencia.

Art. 36. El empleado en las carreras civiles pasará a la situación de excedente:
Por supresión o reforma del destino que sirve.

Por disposición del Gobierno, relevándolo del cargo que ejerza.

Art. 37. En las clases militares y de la armada, la situación de cuartel, de reserva o de reemplazo será de servicio activo, estando sujetas a los deberes que prescriben las ordenanzas.

Art. 38. El empleado excedente tiene derecho a pensión si justifica 15 años de servicio, sin abonos por razón de estudios ni campaña.

Art. 39. Las pensiones de excedencia serán proporcionales al sueldo regulador de empleado desde los 15 años de servicios en adelante, con sujeción a la siguiente

ESCALA DE EXCEDENCIAS.

AÑOS DE SERVICIO.	CÉNTIMOS del sueldo regulador que constituyen la pensión anual.
15	25
20	31
25	50

Art. 40. El empleado disfrutará la pensión de excedencia desde el día siguiente al en que cese en el servicio activo, y desde la fecha de la declaración de excedente, si se hallare en uso de licencia o fuera del servicio por cualquier causa.

Art. 41. La pensión de excedencia es compatible con cualquiera asignación de fondos provinciales y municipales hasta el límite de una cantidad igual al sueldo que en activo servicio disfrutó el empleado. La diferencia de más, si la hubiere, se rebajará de la pensión de excedente. No hay incompatibilidad entre ésta y las asignaciones de fondos particulares.

Art. 42. Los excedentes pueden fijar su residencia en el punto del reino que mejor les convenga. Para residir en el extranjero necesitan obtener licencia del Gobierno.

Art. 43. Los empleados pierden el derecho a la pensión de excedencia:

Por abandonar sus destinos ausentándose del punto de residencia sin la autorización competente.

Por no presentarse a servicios dentro del plazo pre fijado para la posesión, o después de cumplida la licencia que hubiese disfrutado, a no ser que acrediten causa justa que se lo hubiere impedido y obtengan Real habilitación.

Por renunciar los destinos que sirvan, exceptuándose los Ministros de la Corona, los jefes superiores de la administración, los gobernadores de las provincias y los que fueren Senadores o Diputados.

Art. 44. Se suspenderá el pago de la pensión de excedencia:

A los que no aceptaren destino de su carrera en la Península o Islas adyacentes con igual o superior categoría al último que disfrutaron, siempre que no se les exija fianza, exceptuándose los que fueren Senadores o Diputados, y los que justificaren imposibilidad física para su desempeño.

A los que, en el punto de su residencia, se negasen a desempeñar cualquiera comisión propia de su carrera y categoría, siempre que por ella se les exija alguna retribución y no se les exija fianza o fuera de su residencia, si se les asignase el sueldo que disfrutaron en activo servicio.

A los que se ausentaren del reino sin licencia del Gobierno, hasta que la obtengan.

CAPITULO V.

Pensiones de viudas y huérfanos.

Art. 45. Las viudas y huérfanos adquirirán derecho a pensión temporal o vitalicia desde el día siguiente al del fallecimiento del empleado.

Art. 46. Adquiere derecho a pensión temporal las viudas y huérfanos de los

empleados comprendidos en el art. 2.º de esta ley, que fallecieron sin haber completado 15 años de servicios.

Art. 47. Las pensiones temporales serán de 10 céntimos al año del sueldo regulador, y su duración, a contar desde el fallecimiento del empleado, se ajustará a la siguiente

ESCALA DE PENSIONES TEMPORALES.

Años de servicios del empleado.	Años de duración de la pensión.
12 cumplidos.	11
10 sin llegar a 12.	10
8 sin llegar a 10.	9
6 sin llegar a 8.	8
4 sin llegar a 6.	7
2 sin llegar a 4.	5

Menos de 2 años. Igual tiempo que el servido.

Art. 48. Adquieren derecho a pensión vitalicia las viudas y huérfanos de los empleados comprendidos en el art. 2.º de esta ley, que fallecieron después de haber completado 15 años de servicios.

Art. 49. Las pensiones vitalicias serán proporcionales al sueldo regulador y a los años de servicios de los causantes con arreglo a la siguiente

ESCALA DE PENSIONES VITALICIAS.

AÑOS DE SERVICIOS.	CÉNTIMOS del sueldo regulador que constituyen la pensión anual.
15	15
20	20
25	25

Art. 50. No tienen derecho a pensión temporal y vitalicia:

La viuda e hijos del empleado que hubiere contraído matrimonio después de cumplir 60 años de edad.

La viuda e hijos del que lo hubiesen contraído antes de disfrutar durante dos años en las clases civiles, jurídico y político-militares y de sanidad militar y de la armada, sueldo de 8,000 rs. en plaza efectiva con Real nombramiento; en las militares del ejército y armada, antes de obtener el empleo de capitán; y en la de marina, el de teniente de navío.

Las viudas e hijos de los empleados que desde la publicación de esta ley ingresen casados en las carreras civiles, jurídico y político-militares y de sanidad militar y de la armada, con sueldo menor de 8,000 reales.

Las viudas e hijos de los empleados comprendidos en el art. 2.º de esta ley, que hallándose en activo servicio, excedentes o retirados, hubiesen contraído matrimonio sin previa Real licencia, a no ser que obtuviesen indulto. Si este fuese posterior al fallecimiento del empleado, el abono de pensión tendrá lugar desde la fecha del indulto.

Art. 51. Adquieren también derecho a pensión vitalicia las viudas y huérfanos de los empleados de todos los ramos de la administración pública, aunque no se hallen comprendidos en el art. 2.º de esta ley y lo estén en las excepciones del que precede, sea cualquiera el tiempo que cuenten de servicios, si falleciesen por muerte causada en acción de guerra, en defensa del Estado o del orden público, en el ejercicio de sus deberes respectivos, aunque el fallecimiento sobrevenga un año después de la herida o lesión grave que lo ocasionó, o como consecuencia necesaria de ellas, y en naufragios, incendios, terremotos, epidemias, plagas, etc., hallándose prisioneros de guerra.

Igual derecho adquieren las viudas y huérfanos de los que se hubieren retirado por inutilidad con arreglo a los artículos 30 y 35, y también las viudas y huérfanos de los empleados n.º 1.º de la Península e Islas adyacentes que mueran en las provincias de Ultramar, hallándose en servicio activo.

Art. 52. Las pensiones vitalicias de que trata el art. anterior, serán de 25 céntimos del mayor sueldo que hubieren disfrutado los empleados, si estos no

tuvieren 15 años de servicio á su fallecimiento, y tambien de 25 céntimos del sueldo superior inmediato al mayor, que obtuvieron, si sus servicios excediesen de aquel número de años. Respecto á los individuos de las clases de tropa del ejército y armada, las pensiones consistirán, cualquiera que sea el número de años de servicio, en 3 rs. diarios para las viudas y huérfanos ó padres pobres de los sortados, y 2 para los demás individuos de tropa.

Art. 53. Cuando los empleados que fallecieron en cualquiera de los casos de que trata el art. 51 no dejasen viuda ni huérfano, adquirirán el derecho á la pensión sus madres viudas, si no disfrutasen otra del Tesoro público quedándose, en este caso la elección entre una y otra.

Art. 54. En ningún caso tendrán derecho á pensión vitalicia ni temporal los hijos naturales que no estén legalmente reconocidos.

Art. 55. Las viudas percibirán íntegramente la pensión, sea vitalicia ó temporal, con obligación de mantener y educar á los hijos menores, si los tuvieren. En el caso de haberlos de dos ó mas matrimonios, la pensión se dividirá, correspondiendo la mitad á la viuda y la otra mitad á sus hijos propios é hijos de otros.

Art. 56. La viuda que contraiga matrimonio cesará en el cobro de su pensión vitalicia ó temporal. Conservará sin embargo el derecho de volver á disfrutar la vitalicia, si al enviudar nuevamente no le hubiese adquirido á pensión igual ó mayor y no existiesen hijos del primer matrimonio; ó si existiendo, hubiesen perdido el derecho á la pensión de su padre.

Art. 57. Las viudas que con arreglo al artículo anterior optasen á la pensión vitalicia de su primer marido, quedarán obligadas á mantener y educar con ella á los hijos menores, propios é hijos de otros, que les queden del último matrimonio; y si falleciesen, no dejarán á éstos otros derechos que los que por su padre les correspondan.

Art. 58. Si al fallecimiento del empleado solo quedasen hijos, optarán por iguales partes á la pensión vitalicia ó temporal que corresponda, los varones menores de 22 años que no disfrutasen sueldo igual ó mayor del Estado, y las hembras solteras ó viudas que no gozasen como tales pensión del Tesoro por sus maridos.

Art. 59. Cesarán en el cobro de la pensión vitalicia ó temporal los varones luego que cumplan 22 años ó antes si obtuviesen sueldo igual ó mayor del Estado; si éste fuese menor, seguirán percibiendo en concepto de pensión la diferencia; las hembras desde el día en que se casen ó tomen estado religioso.

Art. 60. A medida que los hijos en quienes haya recaído la pensión vayan perdiendo su derecho, se irá acumulando en los demás hasta el último, que la percibirá íntegra, mientras no pierda el suyo.

Art. 61. La huérfana que se case, cesará en el cobro de su pensión vitalicia ó temporal. Si enviuda, podrá optar entre la pensión que le quede por su marido ó la de su padre, si ésta fuese vitalicia, y no hubiere otro partícipe en el cobro de ella.

El mismo derecho tendrá la que se hubiese casado en vida del padre, si al enviudar hubiese éste fallecido, y no cobrase la pensión ni la viuda, ni ninguno de sus hijos.

Art. 62. Los huérfanos varones que al cumplir los 22 años se hallasen absolutamente incapacitados física ó moralmente, continuarán en el cobro de la pensión vitalicia mientras dure la incapacidad, previo expediente justificativo, que se instruirá en la forma que los reglamentos determinen. Si la pensión fuese temporal, continuarán disfrutándola por el tiempo que aun les faltase, si subsistiese la incapacidad.

Art. 63. Si la incapacidad de que trata

el artículo anterior se justificase, después de cumplidos los 22 años, y de haber cesado en el cobro de pensión vitalicia, tendrán derecho los huérfanos varones á la mitad de esta, á contar desde el día en que se acuerde por declaración del Gobierno.

Art. 64. A las viudas de empleados de Ultramar se consignará el pago de sus pensiones sobre las cajas de aquellas provincias, y para trasladarlo á las de la Península se necesitará Real autorización haciéndose en este caso la reducción que por razón de cambio corresponda.

Las viudas de empleados de la Península é islas adyacentes que, por convenio propio, residan en las posesiones de Ultramar, no tendrán por este concepto derecho á aumento de haber, aunque sea á título de cambio ó diferencia de moneda.

Art. 65. Las viudas y huérfanos con pensión del Tesoro pueden fijar su residencia en el punto del reino que mejor les convenga. Para residir en el extranjero necesitan obtener licencia del Gobierno. Si se ausentaren sin ella, se suspenderá el pago de la pensión hasta que la obtengan.

CAPITULO VI.

Disposiciones transitorias.

Art. 66. Los empleados de todas las carreras del Estado, que por reglamentos y disposiciones anteriores á esta ley tuvieron adquiridos derechos con distintas ventajas que las que en ella se determinan, los conservarán en sus actuales clases. En los ascensos que obtengan se sujetarán á las disposiciones de esta ley, á menos que prefiriesen optar á sus anteriores derechos, en cuyo caso no se tendrán en cuenta los servicios posteriores á la misma, retrotrayéndose su clasificación á la fecha de la publicación de esta ley.

Las viudas y huérfanos de los empleados que fallecieron después de la publicación de esta ley, conservarán el derecho á las pensiones que por los reglamentos y disposiciones anteriores les correspondieran si sus maridos ó padres no hubiesen variado de clase. Si esto hubiere ocurrido, optarán entre las pensiones á que por dichos reglamentos y disposiciones tuviesen derecho en la fecha de la publicación de la ley ó las que ésta les señala.

Art. 67. Los empleados de las diversas carreras del Estado que se hallen en servicio activo y no tengan actualmente derecho á cesantía ó jubilación, lo adquieren á las pensiones de excedencia ó retiro, con arreglo á las disposiciones de la misma, cuando pasen á una de estas situaciones después de la publicación de esta ley.

Los que estén hoy percibiendo haberes de jubilación á cesantía, seguirán disfrutándolos en su actual importancia incorporándose á las respectivas clases de retirados y excedentes que por esta ley se establecen.

Los que se hallaren fuera del servicio activo sin percibir haberes de jubilación ni cesantía, no podrán reclamar derecho alguno de los que por esta ley se señalan, mientras que, después de su publicación, no prestaren nuevos servicios, en cuyo caso serán acumulables á estos los anteriores que sean de abono con arreglo á las disposiciones de la misma.

Art. 68. Los empleados actualmente cesantes con haber de tales que por razón de edad ó inutilidad para el servicio debían pasar á la clase de retirados, sin que en ella por esta ley, ni en la de jubilados según las disposiciones anteriores á la misma, tuviesen adquirido derecho á pensión, obtendrán de retiro la que actualmente disfrutaban como cesantes, en armonía con lo dispuesto en el art. 28.

Art. 69. Las viudas y huérfanos de los empleados en las diversas carreras del Estado, que por las disposiciones y reglamentos anteriores no tuviesen derecho á pensión, optarán á la que por

esta ley les corresponda, si el fallecimiento de los causantes tuviese lugar después de su publicación.

Si el fallecimiento hubiere ocurrido antes de la publicación de esta ley, entrarán solo desde la fecha de la misma al percibo de las pensiones que por ella les correspondan.

Art. 70. Desde la publicación de esta ley cesarán los montepíos especiales de Ministerios, oficinas, militares y de otras anteriormente establecidos.

Las pensiones que hoy se satisfacen á título de dichos montepíos, y las que debían declararse en lo sucesivo por efecto de las disposiciones transitorias de esta ley, se incorporarán todas en su actual importancia á las que, en concepto de pensiones de viudas y huérfanos, debían satisfacerse con arreglo á la misma.

Art. 71. Continuarán haciéndose los abonos que se expresarán, si se hubiesen llenado oportunamente las formalidades y requisitos exigidos en cada caso, y sin que pueda abrirse nuevo plazo para reclamar derechos que hayan prescrito.

A los empleados civiles y oficiales del ejército y armada que quedaron privados de sus destinos á virtud del cambio político verificado en 1825, rehabilitados por el Real decreto de 30 de diciembre de 1851 y disposiciones posteriores, se les acreditará por entero el tiempo transcurrido entre ambas épocas si permanecieron sin colocación; pero á los que la obtuvieron, se les abonará solamente hasta que tomaron posesión de sus nuevos empleos, quedando desde entonces sujetos á la legislación común.

El mismo abono se hará á los milicianos nacionales á quienes las Cortes concedieron en 1825 el grado de subtenientes de ejército, siempre que hayan obtenido el Real despacho de dicha gracia, ó el diploma de la cruz de distinción concedida en su equivalencia, cuando estos últimos hayan sido solicitados en tiempo hábil conforme á lo dispuesto en la ley de 25 de mayo de 1856, y que en ellos se exprese que procede de abonos de servicios, según lo determinado en la instrucción expedida para llevar á efecto dicha ley.

Se hará igualmente el abono del tiempo transcurrido desde 1813 á 1851, con entera sujeción á lo que dispone la ley de 26 de julio de 1855, á los empleados que hicieron dimisión de sus destinos ó cesaron por motivos pura y exclusivamente políticos, sin haber solicitado ni obtenido en dicho periodo de tiempo destino, comisión ó cargo alguno lucrativo del Gobierno.

Será asimismo de abono para todos los efectos de clasificación el tiempo servido por los milicianos nacionales movilizados durante el periodo que hubieren permanecido en esta situación fuera de su domicilio, ó sitiados en plazas ó puntos fortificados, debiendo justificarse el tiempo que en este último caso estuvieron hostilizados por el enemigo, sin que sea suficiente el que se hallase declarado en estado de guerra el punto donde servían los interesados en la milicia nacional.

Para acreditar estos servicios se presentará hoja de los mismos relectada por los capitanes generales, á cuyo documento acompañará certificada de las oficinas militares que acredite figuró el interesado en las listas de revista, si percibió haber como movilizado, y si no lo percibió, si renunció á su disfrute, ó no fué acreditado á los de su clase.

Es de abono el servicio prestado y reconocido en la Real Casa y Patrimonio hasta 1.º de junio de 1855.

Lo es igualmente el contratado por los secretarios y oficiales primeros y segundos de las secretarías de las Diputaciones provinciales, nombrados con sujeción á lo dispuesto en la ley de 5 de febrero de 1825, entendiéndose el abono únicamente desde la fecha de dicha ley.

Lo es tambien el servicio prestado en

el campo de Don Carlos por los que se acogieron al convenio de Vergara, y tienen derecho á sus beneficios. El abono, en este caso, nunca podrá exceder del 30 de setiembre de 1859.

Art. 72. Conservarán los derechos que tengan adquiridos los subalternos de Hacienda que principiaron á servir antes del Real decreto de 7 de febrero de 1827, y que por las cualidades de sus nombramientos lo adquirieron á cesantía y jubilación. Lo mismo se entienda respecto á los de iguales clases dependientes de los demás Ministerios civiles hasta la citada fecha, que reúnan las expresadas circunstancias.

Art. 73. Cuando dichos subalternos clasificados con anterioridad al Real decreto de 28 de diciembre de 1849 hayan vuelto al servicio activo en destino que no dé derecho á pensión, si vuelven á la situación de excedentes, disfrutarán el haber que anteriormente les fué señalado.

Art. 74. También conservarán los derechos que tengan adquiridos los empleados procedentes de las fábricas de paños de Guadalupe y de Brihuega; los de las de cristales de San Ildefonso que se hallaban ó quedaron excedentes en 1.º de enero de 1825; los de la de porcelana, que lo quedaron en 2 de mayo de 1808; los de la compañía de Filipinas, consulados y juntas de comercio que obtuvieron Reales nombramientos antes del 31 de agosto de 1836; los de las nuevas poblaciones de Anglucia y Sierra Morena; los de las recibidurías de la orden de San Juan; los del canal de Aragón; los de los antiguos resguardos, y los sargentos, cabos y carabateros de costas y fronteras á quienes se expidieron Reales nombramientos, siempre que perteneciesen al cuerpo en la época de su disolución.

Art. 75. Conservarán derecho á pensión del Tesoro público las viudas y huérfanos de los empleados de la Ayuntamiento de Madrid, del antiguo banco español de San Carlos, y del Monte de Piedad de esta corte, que se hallaban incorporados al montepío civil antes de 26 de diciembre de 1851.

Madrid 20 de mayo de 1862.—El Ministro de Hacienda, Pedro Salaverria. (Gaceta de 24 del actual.)

TERCERA SECCION.

INSTITUTO

DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE ORENSE.

Aciso á los profesores y alumnos de enseñanza doméstica.

El 12, 13 y 14 de junio son los días señalados para los exámenes de enseñanza doméstica en las asignaturas de Catecismo é Historia sagrada, Francés y Geografía, á los que deberán concurrir dichos alumnos con el certificado de su respectivo Profesor. Los que por justas causas no se presentaren en los días señalados, podrán ser admitidos en los siguientes no festivos hasta la conclusión del mes, y en otro caso quedarán para los exámenes extraordinarios de setiembre.

Orense mayo 26 de 1862.—El Director, Leoncio Perejon.

SECCION DE ANUNCIOS.

DE VIGO PARA MONTEVIDEO Y BUENOS-AIRES.

Saldrá á la posible brevedad la Corbeta «Ignacia» Capitan D. Manuel Soto, y admite algunos pasajeros, á los que se dará el buen trato que tiene tan acreditado.

La despachan sus armadores D. Francisco Tapias y Hermano, y dará razon en Orense D. Pedro San Vicente.

IMPRESA DE D. CESAREO PAZ Y H.